

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 31 de agosto de 2022.

Auto Interlocutorio No. **345**

MAGISTRADO PONENTE: OMAR EDGAR BORJA SOTO

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO (INCIDENTE REGULACIÓN DE HONORARIOS)
EXPEDIENTE:	76001-33-33-017-2013-00173-04
DEMANDANTE:	Enrique Vega Rodríguez No aporta correo
DEMANDADO:	Yolanda Osorio Trujillo y otros No aporta correo
MINISTERIO PÚBLICO	fimoreno@procuraduria.gov.co
EXPEDIENTE VIRTUAL	SAMAI Proceso Judicial (consejodeestado.gov.co) 76001333301720130017300 EJ
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO – CONFIRMA y ADICIONA AUTO QUE RESUELVE INCIDENTE REGULACIÓN HONORARIOS

ADVERTENCIA SOBRE PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE Y MEMORIALES.

En aras del cumplimiento del artículo 46¹ de la Ley 2080 de 2021 que modifica el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, las partes cuentan con los documentos necesarios para formular sus alegaciones en la medida en que fueron notificados de todas las actuaciones surtidas en el proceso y se surtieron los correspondientes traslados.

La **Ley 2080 del 2021**, vigente en materia procesal a partir del 26 de enero de este año, reformó el CPACA, por lo cual se hacen las siguientes precisiones:

El **expediente físico** fue digitalizado y puede consultarse en el repositorio **MERCURIO**, previa solicitud de acceso al siguiente link <https://bit.ly/3i5HGEU> . En el siguiente link encontrará un video tutorial para el ingreso: <https://bit.ly/3BQHMIln>.

El **expediente digital** está en la sede electrónica **SAMAI**, donde podrá consultar las actuaciones en el botón **“CONSULTA DE PROCESOS”** en el siguiente link <https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx>.

En SAMAI también encontrará la VENTANILLA VIRTUAL, link <https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8087/> donde los sujetos procesales podrán solicitar ACCESO A LOS EXPEDIENTES para consultar documentos protegidos, pedir CITA VIRTUAL y además deberán **RADICAR MEMORIALES Y ESCRITOS los cuales se gestionarán directamente al proceso, lo que garantiza celeridad, economía, eficiencia, transparencia y publicidad, por tanto, es el canal oficial para recibir memoriales** a partir del **16 de mayo de 2022**.

Para el ACCESO A LOS EXPEDIENTES debe ingresar a la VENTANILLA VIRTUAL, dirigirse al módulo “Solicitudes y otros servicios en línea”, dar clic en “Acceso a expedientes” aceptar términos y condiciones, diligenciar el formulario respectivo, anexando copia del documento de identidad que acredite su calidad dentro del proceso.

Para radicar memoriales debe ingresar a la VENTANILLA VIRTUAL, dirigirse al módulo “Solicitudes y otros servicios en línea”, dar clic en “Memoriales y/o Escritos”, aceptar términos y condiciones, diligenciar el formulario respectivo anexando copia del documento de identidad que acredite su calidad dentro del proceso **y cargar los archivos con destino al proceso** en los formatos permitidos pdf,.docx,.doc,.xlsx. Tamaño máximo por cada archivo: 20 MB.

En el siguiente link podrá consultar un video tutorial que lo guiará en SAMAI [VENTANILLA VIRTUAL](#)

Solo de manera subsidiaria continuarán recibiendo escritos y memoriales en el correo electrónico: rpmemorialestadmvc Cauca@cendoj.ramajudicial.gov.co identificando la radicación completa del expediente, el magistrado ponente, el medio de control, las partes y el asunto so pena de no gestionar el memorial. Las partes darán cumplimiento al artículo 78.14 del CPG

I. OBJETO DE LA DECISION

Se resuelve recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el auto interlocutorio Nro. 952 del 07 de diciembre de 2019 proferido por el Juzgado Diecisiete Administrativo Oral de Cali, que resolvió fijar como honorarios al abogado ENRIQUE VEGA

RODRÍGUEZ, el equivalente al 50% de las pretensiones reconocidas en la sentencia de fecha 28 de mayo de 2010, proferida por esta corporación.

II. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado ante el Juzgado Diecisiete Administrativo del Valle del Cauca¹, el abogado Enrique Vega Rodríguez presentó incidente de regulación de honorarios en contra de los señores Mauricio Hernán Tabares, Katherine Gutierrez Osorio y Yolanda Osorio Trujillo, quienes fueran sus mandantes dentro del proceso de reparación directa adelantado en contra del Instituto de Seguro Social – Suprimido y otros.

Como fundamento de su petición, señalaron que los mandantes, le otorgaron poder para adelantar la demanda de la referencia. Que, en efecto se efectuaron todos los trámites tendientes a llevar a su fin el aludido proceso, no obstante, se presentó un pago parcial de la condena quedando pendiente el pago de la mitad de la misma, lo cual influye en el pago de los honorarios del abogado Vega Rodríguez.

A pesar de cumplir con el contrato de mandato, los poderdantes decidieron revocar el poder sin el respectivo paz y salvo por el pago de honorarios profesionales. A partir de lo anterior, solicita que se ordene el reconocimiento y pago de los honorarios profesionales causados por su gestión aportando el contrato de mandato para establecer una justa tasación de los mismos por el saldo pendiente por pago.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

El el Juzgado Diecisiete Administrativo Oral de Cali mediante auto 952 del 07 de diciembre de 2018, dispuso fijar como honorarios a favor del abogado Enrique Vega Rodríguez el equivalente **al 50% del monto de pretensiones reconocidas en la sentencia** de fecha 28 de mayo de 2010 proferida por este Tribunal, descontando a ello el pago parcial efectuado por el Instituto del Seguro Social ISS.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

Sostiene la parte recurrente² que, si bien existe un contrato de prestación de servicios profesionales, tal representación judicial debió ser revocada en virtud del incumplimiento reiterado del señor Vega Rodríguez, lo que generó que los poderdantes no se hicieran parte en el proceso liquidatorio del ISS, y posteriormente iniciar tardíamente el proceso ejecutivo después de agotar múltiples intentos improcedentes.

Considera se equivoca el A quo al considerar que el ejercicio del mandato terminó con la sentencia de reparación directa, omitiendo que la labor contratada era garantizar el pago de la totalidad de las condenas decretadas, sin embargo, frente a la impericia en el ejercicio del mandato, su representación tuvo que ser revocada para poder acudir a otros profesionales del derecho.

En todo caso, la gestión realizada por el abogado, los honorarios deben circunscribirse al monto capital pero no a los intereses corrientes ni moratorios, pues la clausula tercera del contrato de prestación de servicios no indicó nada sobre intereses moratorios, por tal razón mal haría el despeso en concederlos cuando se causaron, en su mayoría, con posterioridad a la revocatoria del poder.

¹ Folios 3 - 8.

² Folios 66 – 68.

En consecuencia, solicitó que se concedieran las agencias en derecho en la forma prevista en la normatividad vigente, y por otro lado, se determine que la base de calculo para los honorarios sea el capital objeto de la condena únicamente.

V. CONSIDERACIONES:

a. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA, esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación presentado contra la providencia de primera instancia.

b. PROBLEMA JURÍDICO

En el presente caso, el problema jurídico se contrae en determinar si en el presente caso es procedente confirmar o modificar el porcentaje y la base (capital e intereses o solo capital) de honorarios que le corresponden al abogado Enrique Vega Rodríguez, por la labor encomendada y de la cual se desprenden las pretensiones reconocidas en la sentencia de fecha 28 de mayo de 2010, proferida por esta corporación.

c. CONSIDERACIONES.

El anterior Código Contencioso Administrativo, al igual que la Ley 1437 de 2011, establecen que las cuestiones accesorias que se presenten dentro de un proceso se tramitarán como incidente y, a su turno, prevén que, para el trámite, la preclusión y efectos de los incidentes se seguirá lo previsto en el Código de Procedimiento Civil.

A su vez, las citadas disposiciones indican que en los aspectos no regulados en dicho estatuto se deberá acudir a las disposiciones de las normas del procedimiento civil, hoy Código General del Proceso, en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Teniendo en cuenta lo anterior, es del caso precisar que la reclamación de honorarios a través de incidente se encuentra regulada en el **artículo 76 del Código General del Proceso**, disposición que para el efecto señala que el apoderado a quien se le haya revocado el poder podrá pedir al juez que se regulen sus honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior.

El citado precepto en el inciso segundo determina:

“Dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de dicha providencia, el apoderado a quien se le haya revocado el poder podrá pedir al juez que se regulen sus honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior. Para la determinación del monto de los honorarios el juez tendrá como base el respectivo contrato y los criterios señalados en este código para la fijación de las agencias en derecho. Vencido el término indicado, la regulación de los honorarios podrá demandarse ante el juez laboral”.

De la norma en cita, se infiere que para que opere el reconocimiento y regulación de honorarios al abogado al que se le hubiera revocado el poder, es necesario que se interponga un incidente, que se tramitará en la forma prevista por el Código General del Proceso. Dicho incidente deberá presentarse en los 30 días siguientes a la notificación del auto que admite la revocatoria del poder.

De igual manera, para la procedencia del incidente de regulación de honorarios se requiere de una manifestación de voluntad por parte de quien tiene la facultad de revocar el poder.

La revocatoria del poder pone fin a la representación en juicio, con pleno efecto respecto de los sujetos procesales y de los terceros intervinientes, pero no desconoce el contrato de gestión; el que, de existir, rige de manera preferente las relaciones entre poderdante y apoderado y al que éstos se deberán remitir para arreglar sus diferencias; entre ellas, aquellas generadas por razón de la revocatoria injustificada del poder. Así las cosas, el abogado que concluye su labor en juicio a causa de la revocatoria del poder, sin perjuicio de los derechos derivados del eventual contrato de gestión, puede solicitarle al Juez de la causa que liquide sus honorarios teniendo en cuenta, simplemente, la labor realizada³.

Sobre el tema, la Alta Corporación⁴ ha señalado lo siguiente:

“Al respecto conviene precisar los siguientes aspectos: i) según la norma legal en cita, para la prosperidad del incidente de regulación de honorarios debe acreditarse la existencia de la obligación por parte de la persona que revocó el poder con el apoderado que promueva el correspondiente incidente y; ii) en todo caso, se debe respetar la limitante prevista en la norma en relación con la determinación del monto que llegare a resultar por concepto de honorarios, consistente en que, en cualquier caso, dicha suma no podrá superar el valor de los honorarios pactados.

Ahora bien, el Despacho pasa a realizar el pronunciamiento que en derecho corresponde a efectos de determinar la retribución que por concepto de honorarios solicita el incidentante.

Para empezar, el escrito incidental da cuenta de que la solicitud de regulación de honorarios profesionales se fundamenta en la existencia de un **contrato de prestación de servicios** profesionales suscrito entre Yolanda Osorio Trujillo, Mauricio Hernán Tabares y Katherine Gutiérrez Osorio, en calidad de poderdantes, y el abogado Enrique Vega Rodríguez, en calidad de apoderado. Este convenio estaba dirigido a iniciar, desarrollar y llevar hasta su término proceso de reparación directa en contra de la E.S.E. Antonio Nariño, tendiente a obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a los demandantes que reclamaron en un proceso en curso con radicación 2006-00033-00 en el Juzgado 18 Administrativo del Circuito de Cali.

A partir de lo anterior, es del caso señalar que el Consejo de Estado ha sostenido frente al Contrato de Prestación de Servicios o Contrato de Gestión de los honorarios profesionales, lo siguiente:

“(…) Regularmente el valor de los honorarios profesionales, además de los demás derechos y obligaciones, es acordado entre el abogado y su cliente -persona que pretende comparecer al proceso con el fin de hacer valer un derecho subjetivo (derecho de postulación)- con anterioridad al inicio del proceso o de los procesos respectivos, a través de la celebración de un contrato de mandato o de prestación de servicios profesionales.

Así pues, comoquiera que el apoderado y su poderdante regulan su relación a través de la celebración de un tipo contractual, en el cual, claro está, se incluyen cláusulas tendientes a determinar el monto al cual deben ascender los honorarios del abogado o representante, resulta apenas concordante que la ley procesal fije como límite, para aquellos eventos en los cuales se pretenda que se regulen los honorarios en el proceso donde el abogado intervino, que el monto que pueda resultar del trámite del incidente no deba desconocer el valor previsto en el correspondiente contrato de mandato o de prestación de servicios, aún cuando el respectivo acuerdo de voluntades fuere pactado de manera verbal (...)

³ Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 10 de septiembre de 2014, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación No. 11001-03-28-000-2011-00059-00.

⁴ Ibídem.

*En efecto, para la regulación o fijación del monto al cual deben ascender los honorarios de un Abogado cuando se promueve el incidente de que trata el artículo 69 del C. de P. C., resulta determinante como requisito sine qua non el **contrato**, sea este escrito o verbal, por medio del cual tanto el poderdante, como su apoderado, hubieren fijado los términos de su relación negocial”⁵.*

En este punto, esta Agencia Judicial considera importante destacar que, conforme al Código General del Proceso, la gestión desarrollada por los procuradores judiciales al interior de los respectivos procesos se sustenta en el poder que se les haya otorgado en la forma autorizada en el artículo 74 de dicho estatuto y, generalmente, lo concerniente a su remuneración está soportado en un “contrato de mandato”, al que se refiere el canon 2144 del Código Civil, según el cual, los “servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios, o a la que está unida la facultad de responder y obligar a otra persona, respecto de terceros, se sujetan a las reglas del mandato”.

En lo atinente a las prestaciones a favor del “mandatario”, el precepto 2143 ibídem establece que el “mandato puede ser gratuito o remunerado. La remuneración es determinada por convención de las partes, antes o después del contrato, por la ley o por el juez”, y acorde con la regla 3ª del artículo 2184 del estatuto civil, el “mandante es obligado (...) [a] pagarle la remuneración estipulada o usual”.

En el *sub lite*, entre las partes, apoderados y poderdante, existe pacto expreso sobre la remuneración del iniciador del asunto, consistente en el pago **del 50% de las results del proceso**, es decir, que los honorarios profesionales se pactaron a cuota *litis*, entendida como un porcentaje en función de lo obtenido.

Respecto de esta modalidad de convenio y pago de honorarios, la Corte Suprema de Justicia ha señalado:

“La modalidad de la contratación de la gestión profesional a cuota litis admitida por ambas partes, indica de entrada para la Corte que los contratantes colocan de por medio la eventualidad de un resultado económico concreto y estimable, que de darse será el parámetro único para establecer el valor de los honorarios que se generan a favor de quien ha puesto al servicio del mandante su gestión, su diligencia y sus conocimientos”⁶.

Se trata, por consiguiente, no de establecer un valor fijo al que se accederá de todas maneras, sino de un azar en tanto los honorarios **dependen del éxito de la gestión**. En el presente asunto, los demandantes y el profesional del derecho manifestaron sin equívocos que los honorarios se pactaban en cuota *Litis*, y dejaron plasmado en el contrato de prestación de servicios profesionales lo siguiente:

*“...**SEGUNDA. TÉRMINO.** El término de duración del presente contrato será por la duración del proceso mencionado, hasta su culminación, en las instancias necesarias. **TERCERA. VALOR.** El valor total por la prestación del servicio, será a cuota litis, esto es, Cincuenta Por Ciento (50%) del valor total que por concepto de indemnización de perjuicios materiales, morales o fisiológicos le fueren reconocidos a los **CONTRATANTES** como condena a cargo del demandado y que los **CONTRATANTES** pagarán al **CONTRATISTA** para lo cual por este documento autoriza expresamente al **CONTRATISTA** para que cobre y se descuente directamente del total que resultare la condena en el proceso mencionado...”*

⁵ Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 18 de enero de 2013, C.P: BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ. Radicación: 1999-00871-01 (0825-12),

⁶ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sentencia de 21 de marzo de 2001, Magistrado Ponente: NICOLÁS BECHARA SIMANCAS, expediente No. 1100122030002001-0010-10.

En este sentido, a efectos de determinar si resulta procedente el reconocimiento de los honorarios solicitados por la parte incidentante, corresponde al Despacho enumerar sus actuaciones, así:

1. El abogado Enrique Vega Rodríguez, conforme a las pruebas aportadas al expediente **tramitó hasta su culminación el proceso con radicado 2006-00033-00**, el cual terminó según constancia de ejecutoria visible en la página 134 (edicto folio 128) del documento pdf “01ProcesoParte01.pdf”, el día **18 de octubre de 2010** y posteriormente **presentó el proceso ejecutivo 76001-33-33-017-2013-00173-00 según acta de reparto el 14 de diciembre de 2012** página 151 ibidem, ante esta corporación, proceso el cual fue remitido al Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali por ser de su competencia.
2. Por auto del **15 de agosto de 2013** (páginas 158 – 160) el Juzgado 17 Administrativo del Circuito de Cali **libró mandamiento** a cargo de la entidad liquidada por concepto de capital insoluto de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Valle en sentencia del 28 de mayo de 2010 dentro del proceso de reparación directa 2006-00033.
3. **Encontrándose el proceso ejecutivo en trámite para resolver las excepciones** propuestas en contra del mandamiento de pago, los demandantes mediante memorial poder del **2 de octubre de 2014 revocaron el poder** conferido al abogado Enrique Vega Rodríguez⁷⁷. En los escritos subsiguientes a la revocatoria de poder, los demandantes dijeron que entre él y su apoderado se presentaron una serie de pleitos judiciales frente a los cuales este actuó de forma desleal. También se manifiesta por parte de los poderdantes que por negligencia del apoderado se dilató el cobro de la condena restante pendiente por cancelar, la entidad demandada fue suprimida y no se hicieron parte del proceso liquidatorio.

Pese a lo expuesto, evidencia el Despacho que el abogado Enrique Vega Rodríguez actuó con el objeto de hacer efectivo el pago de la condena incluso instaurando el ejecutivo sin que operara la caducidad, se corrigió por el A quo el sujeto procesal de la entidad liquidada y el proceso ejecutivo sigue en curso.

Sin perjuicio de lo anterior, y a pesar de las controversias generadas entre los poderdantes y el apoderado, lo cierto es que resulta claro que el abogado Enrique Vega Rodríguez tienen derecho a percibir honorarios, pues, durante el trámite del proceso, intervino conforme al poder que se les confirió, y en esa condición adelantó las gestiones antes aludidas hasta el cobro ejecutivo, como consta a lo largo del expediente. Vale la pena acotar que, si bien los poderdantes adujeron que **la revocatoria del poder se dio debido a la actuación negligente del apoderado, no se acredita dicha situación**, teniendo en cuenta que hasta la presentación de la revocatoria del poder estuvo interviniendo en el proceso ejecutivo 76001-33-33-017-2013-00173-00, se libró mandamiento de pago y quedaba pendiente continuar el trámite de seguir adelante con la ejecución.

De igual forma, debe tenerse en cuenta que en el contrato al que se hizo referencia en líneas anteriores se pactaron honorarios a *cuota litis*, por el 50% de lo que se llegue a reconocer en el proceso. En ese sentido, debe tenerse en cuenta lo preceptuado en el artículo 366, numeral 4 del Código General del Proceso, que dice:

“4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”. (Negrita y subrayas fuera del texto).

⁷⁷ Folios 234 – 235 del expediente.

En el mismo sentido, el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, “*Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho*”, dispone en el artículo 2 lo siguiente:

*“ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, **la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente**, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites”.* (Negrita y subrayas fuera del texto)

Conforme a las disposiciones citadas, el pago del porcentaje pactado (50% de las resultas del proceso), se generaría si el apoderado hubiera actuado durante todo el proceso, siendo el caso, sus actuaciones llegaron hasta la etapa de cobro ejecutivo de la obligación.

En este orden de ideas, sin desconocer la naturaleza consensual y dispositiva del contrato de prestación de servicios, contenido en el documento escrito aportado en el presente trámite incidental, se considera que el abogado Jorge Enrique Vega Rodríguez tiene derecho, por concepto de honorarios, al 50% del valor de las pretensiones que se le reconocieron a los incidentados, del valor total que por concepto de indemnización de perjuicios materiales, morales o fisiológicos les fueron reconocidos, tal como lo estipula la cláusula 2ª del contrato de prestación de servicios profesionales, pues **si bien la parte incidentada sostiene que los intereses moratorios no fueron incluidos, tampoco se excluyen**, antes por el contrario, la misma cláusula referida del contrato es clara en establecer que el porcentaje es sobre el valor total, **restando los rubros que por concepto de honorarios recibió el abogado Enrique Vega Rodríguez por el pago parcial efectuado por el ISS.**

En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

R E S U E L V E:

PRIMERO.- CONFIRMAR el numeral primero del auto 952 del 07 de diciembre de 2019 proferido por el Juzgado Diecisiete Administrativo Oral de Cali, que resolvió fijar como honorarios al abogado ENRIQUE VEGA RODRÍGUEZ, el equivalente al 50% de las pretensiones reconocidas en la sentencia de fecha 28 de mayo de 2010.

SEGUNDO.- ADICIONAR el auto recurrido en el sentido de aclarar que debe restarse los rubros que por concepto de honorarios recibió el abogado Enrique Vega Rodríguez por el pago parcial efectuado por el ISS.

TERCERO.- Ejecutoriada la presente providencia envíese el expediente al juzgado de origen para lo de su cargo.

CUARTO.- INFORMAR a las partes que el canal oficial para recibir memoriales y escritos será la **VENTANILLA VIRTUAL** de SAMAI, como se explica en el capítulo de publicidad de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Firmado electrónicamente.
OMAR EDGAR BORJA SOTO
Magistrado.